

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Ref. Acción de tutela No. 2022-00378

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponde frente a la acción de tutela incoada por DANNY ESTEBAN ANGEL GONZÁLEZ contra la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El accionante reclamó el amparo de su derecho fundamental de petición, que considera vulnerado por la accionada al no darle respuesta a la solicitud presentada el 1° de abril de 2022, en consecuencia, instó que se ordenara a la entidad convocada a atender de forma clara, concreta y de fondo la misma.

2. Fundamentos Fácticos

1. El actor adujo, en síntesis, que el 1° de abril del año en curso radicó derecho de petición ante la Secretaría Distrital de Movilidad, en el que solicitó la realización de un estudio de cartera identificando y declarando la prescripción de comparendos integrados en el acuerdo de pago celebrado con la entidad.

2. Sin embargo, a la fecha de presentación de la acción no se le ha brindado respuesta clara, concreta y de fondo a la solicitud incoada.

3. Trámite procesal

La acción de tutela se admitió mediante proveído de fecha 22 de abril de la presente anualidad.

1. En respuesta al requerimiento efectuado, la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** manifestó que la acción de tutela resulta improcedente para discutir las actuaciones contravencionales por infracciones a las normas de tránsito, pues el accionante al momento de la notificación de una orden de comparendo tiene la opción de acudir a una audiencia pública en aras de ejercer su defensa, carga que no puede suplirse con la presentación del escrito tutelar o en su defecto proceder si lo considera pertinente accionar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que sea la acción constitucional el mecanismo idóneo para tal fin, amén que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.

Con relación al caso del accionante señaló que mediante SDM 20225404393151 de fecha 27 de abril del año en curso, se dio respuesta a la petición elevada, la cual fue remitida a la dirección de correo electrónico suministrada por el

convocante, motivo por el que se configuró un hecho superado teniendo en cuenta que con ocasión a la acción de tutela se adelantaron las actuaciones pertinentes a fin brindar contestación a lo requerido por el peticionario.

III. PROBLEMA JURÍDICO

El Despacho advierte que el problema jurídico en el presente asunto se circunscribe a determinar si se vulneró o no el derecho fundamental de petición del accionante.

IV. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando los mismos resulten vulnerados por la acción u omisión de las autoridades o de un particular, que preste “*un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado subordinación o indefensión*”, y no cuente con otro mecanismo judicial para su salvaguarda.

Por esta razón, la finalidad última de esta acción constitucional es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que se configure la amenaza que sobre él se cierne.

2. El derecho que considera vulnerado la parte actora es el de petición, consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, consiste en la facultad que tiene toda persona de elevar solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas y obtener a cambio una decisión que le resuelva el asunto sometido a consideración de forma pronta, clara, precisa y de fondo, conforme a lo requerido, sin que ello implique que la misma debe ser afirmativa, siendo entonces dos sus elementos esenciales: por un lado está la pronta resolución y, por el otro, el que se dé una respuesta de fondo sobre el asunto solicitado, al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-396 de 2013 precisó:

“Es deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que, en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos. Ha señalado igualmente la jurisprudencia, que la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma.”

Con relación al término para resolver las peticiones la Jurisprudencia constitucional refiere que: “**La pronta resolución** constituye una obligación de las autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general, 15 días hábiles. Para este Tribunal es claro que el referido lapso es un límite máximo para la respuesta y que, en todo caso, la petición puede ser solucionada con anterioridad al vencimiento de dicho interregno” (Sentencia C-007 de 2017)

Aunado a lo anterior, dado el fenómeno de salud pública que atraviesa actualmente el país por el virus Covid19 y por cuanto el término antes descrito resulta insuficiente para atender las peticiones debido a las medidas de aislamiento adoptadas, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Justicia

y del Derecho emitió el Decreto Legislativo 491 de 2020 ampliando el lapso para resolver las solicitudes así:

“Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.”

3. Bajo las anteriores precisiones de orden legal y constitucional, en el caso puesto a consideración del Despacho se advierte que el 1° de abril del año que cursa el señor Danny Esteban Ángel González radicó un escrito ante la Dirección de Gestión de Secretaría Distrital de Movilidad, con miras a que se realice un estudio de cartera identificando y declarando la prescripción de comparendos integrados en el acuerdo de pago celebrado con la entidad. Ante la falta de respuesta de la entidad accionada considera vulnerado su derecho fundamental de petición.

Conforme a los anteriores fundamentos fácticos se evidencia que la acción de tutela se instauró de manera pretemporánea, ya que, según se constata del acta de reparto, la misma se presentó el 22 de abril del presente año, es decir, transcurridos aproximadamente 10 días de tramitada la solicitud elevada el pasado 1° de abril ante la autoridad de tránsito accionada, lo que de suyo permite colegir que conforme al decreto vigente (Art. 5° Decreto 491 de 2020), el término que tiene la entidad no ha fenecido incluso a la fecha del presente fallo pues cuenta hasta el 20 de mayo de 2022 para emitir un pronunciamiento claro, concreto y de fondo siendo evidente que cuando se formuló la acción de amparo, no se cumplía el término legal para que el ente convocado diera respuesta de manera oportuna a la petición en comento.

4. Al margen de lo anterior, del informe rendido por la Secretaría Distrital de Movilidad, se advierte que la solicitud incoada fue resuelta de fondo, de manera clara, precisa y congruente a través del oficio SDM 20225404393151 de fecha 27 de abril de 2022 dirigida al aquí actor mediante la cual se le pone de presente que en Resolución No. 118818 de 2022 se decretó la prescripción del derecho a ejercer la acción de cobro en su contra adjuntando copia del acto administrativo.

Dicha misiva fue remitida vía correo electrónico a la dirección “*dannydoro1981@gmail.com*”, la cual coincide con la reportada tanto en el escrito de petición como en la acción de tutela, lo que de suyo permite colegir que no existe vulneración del derecho fundamental deprecado, pues la convocada emitió un pronunciamiento de fondo frente a las inquietudes planteadas dentro de la oportunidad legal correspondiente.

5. Por los anteriores motivos habrá de negarse la acción de amparo por ausencia de vulneración.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto **el Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VI. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental incoado por Danny Esteban Ángel González, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese esta providencia a las partes por el medio más expedito conforme prevé el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si el actual proveído no es impugnado, remítase el presente expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2d1d24154c75d26f602dd75d90c11a6713063d7d7e7572b88baf510ad1bbeddc**

Documento generado en 04/05/2022 11:24:27 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>